

## PEDRO MATIAS

El estado de Oaxaca está ubicado en la parte sureste de México. Es el quinto estado más grande en el país. Es un estado con un pasado prehispánico donde florecieron las culturas Zapoteca y Mixteca. Sus mayores monumentos son Monte Albán, Mitla, Yagul y el cerro de las Minas.

Un aspecto importante en esta entidad es que en ella cohabitan 16 grupos étnicos y por consiguiente, el igual número de idiomas con ciertas variantes en cada pueblo, lo que significa que su cultura está viva.

Los grupos étnicos que conviven son: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chontales, chochos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuatlecos, triquis, zapotecos, zoques y popolacas. Son más de un millón 300 mil indígenas y viven en la más extrema pobreza.

La economía del estado se basa principalmente en la agricultura y la ganadería. Y en la producción forestal, el estado ocupa el quinto lugar en el país. Además, en la Sierra Juárez se encuentran los yacimientos más importantes de oro, plata, plomo y cobre.

Lo preocupante del caso es que México se alista para iniciar la fase experimental de siembra y cosecha de maíz genéticamente modificado.

Apenas, en marzo pasado, el gobierno mexicano promulgó modificaciones legales para permitir el uso experimental de maíz genéticamente modificado, lo que desató una polémica sobre los riesgos de contaminación a los cultivos nativos del país que es considerado el lugar de origen del grano. En el país existen al menos 59 razas de maíz y cerca de 200 variedades.

A la fecha, el gobierno ha recibido 31 solicitudes de siembra experimental de maíz transgénico para el consumo humano, principalmente de las empresas Dow AgroScience, PHI de México y Monsanto Comercial.

El pasado 15 de octubre, el Gobierno federal autorizó las primeras dos solicitudes y el 21 de octubre aprobó otras 13, de las 31 solicitudes para experimentar la siembra de maíz transgénico.

Lo curioso es que mientras en países como Alemania ya se dieron cuenta de los riesgos de los transgénicos, en México se están autorizando cuando se pueden evitar los efectos de este mal.

Por lo que se refiere al caso de Oaxaca, los indígenas, principalmente zapotecos y mixes se han opuesto rotundamente a la utilización del maíz transgénico, a la exploración y explotación de sus minas y a la geopiratería. Contrario a eso se ha dedicado al cuidado de sus recursos naturales, a tal grado que le ha valido, principalmente en la Sierra Juárez y la Sierra Sur, a recibir reconocimientos internacionales en bosques certificados y el manejo forestal comunitario.

En la actualidad existen cerca de 500 comunidades en todo el país que manejan alrededor de 3 millones de hectáreas de bosques y selvas con programa de manejo forestal y cerca de un millón de hectáreas certificadas forestalmente. Es un proyecto donde la comunidad se apropia de sus decisiones y fortalece el uso de sus recursos naturales.

Un 80% de la superficie con cobertura forestal en el país es propiedad de comunidades y ejidos forestales.

De 2004 a la fecha hay 2 mil 863 proyectos comunitarios en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Durango, para acciones como certificación, cultivo forestal, aserraderos, conservación, capacitación, evaluación rural, ordenamiento territorial comunitario, reglamentos comunitarios, plantas embotelladoras de agua y turismo de naturaleza, entre otros.

Yo voy a referirme a lo que conozco que es Oaxaca y particularmente a la Sierra Juárez donde desde hace cinco años producen muebles con el sello de calidad (TIP) e incluso les ha merecido reconocimientos internacionales como el de la Forest Steward Council (FSC, por sus siglas en inglés), que certifica la calidad de empresas muebleras en el mundo.

Además, tienen bosques protegidos de plagas e incendios, tienen su propia embajadora de agua y generan empleos cuidando su medio ambiente.

Esta zona indígena es considerado una de las 16 áreas más biodiversas del mundo por el World Wildlife Fund (WWF), es decir, la Sierra Juárez es una de las pocas sierras mexicanas con bosques muy bien conservados. Esto se debe al manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades indígenas.

El responsable del área de derechos indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Aldo González Rojas, destacó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAM) al maíz, al frijol, la azúcar y la leche en polvo, no solo se perderá la soberanía alimentaria sino que acelerará la emigración entre los pueblos indígenas y por consiguiente pondrá en riesgo el sistema comunitario.

Hizo hincapié en que durante los últimos siete años han salido más del 30 % de la población económicamente activa de las comunidades indígenas de la Sierra Norte.

### BIOPIRATERÍA

Por otra parte, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca denunció un caso de biopiratería: ¿Qué es la biopiratería? La biopiratería es el acceso, uso y/o aprovechamiento ilegal, irregular y/o inequitativo de recursos biológicos y sus derivados, así como de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas asociados a ellos, en especial mediante el uso de la

propiedad intelectual, con la finalidad de irrogarse derechos exclusivos sobre ellos.

El indígena zapoteco consideró que “no fue coincidencia” que en agosto de 2006 --en pleno auge del movimiento popular-magisterial-- arribara a la Sierra Juárez un equipo de investigación estadounidense para presuntamente estudiar el impacto del Programa de certificación de derechos ejidales en las comunidades oaxaqueñas.

Aseguró que el Departamento de Defensa estadounidense, a través de la Oficina Militar de Estudios Foráneos (FMSO, por sus siglas en inglés), financió el proyecto México Indígena con medio millón de dólares. Sin embargo, el responsable del proyecto, el geógrafo Peter Herlihy, nunca mencionó que este prototipo de investigación era financiado por la Armada estadounidense y que le entregaría reportes de su trabajo.

También omitió que tendría participación en el proyecto la empresa armamentista y de inteligencia militar Radiance Technologies. Únicamente admitió que colaborarían la Sociedad Geográfica Americana y las universidades estadounidenses de Kansas y Carleton, así como la Autónoma de San Luis Potosí y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Empero la investigación causó desconfianza entre las comunidades de Santa Cruz Yagavila y Santa María Zoogochi, que abandonaron el proyecto. Entonces el equipo de México Indígena centró sus actividades en las comunidades de San Miguel Tiltepec y San Juan Yagila, ubicadas en el rincón de la Sierra Juárez. Fue en noviembre pasado cuando Peter Herlihy y John Kelly, del equipo de México Indígena, informaron que habían culminado trabajos y mapas de Yagila y Tiltepec.

Estel proyecto forma parte de una investigación geográfica mayor, denominada Expediciones de Bowman, auspiciada y financiada por la armada estadounidense.

En síntesis, consideran que detrás del proyecto México Indígena se ocultan objetivos intervencionistas del Departamento de Defensa estadounidense, pues indaga el régimen de propiedad de los pueblos indígenas para, posteriormente, formular políticas públicas que alteren la cosmogonía de las comunidades oaxaqueñas. Es un típico caso de ‘geopiratería’, sostuvo González Rojas, quien aclaró que el objetivo militar “no sólo está relacionado con la cuestión armada, sino que también se relaciona con el diseño de políticas hacia la población asentada en territorios que interesan a Estados Unidos, como sucede con Colombia, Afganistán, Jordania y Kazajistán.

05/noviembre/2009